



Declaración de entidades sociales, profesionales y personal investigador por una estrategia inclusiva, durante y después de la crisis.

A partir del próximo 1 de enero va a dar comienzo el Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión, coincidiendo con el turno de Presidencia Española de la Unión Europea, y todo ello en una fase de crisis económica que ha tenido ya unos efectos dramáticos en la destrucción de empleo y está teniendo consecuencias importantes en el aumento de las necesidades más básicas de amplios sectores de la sociedad española y especialmente en los más desfavorecidos. En este contexto, más de dos centenares de profesionales, voluntarios e investigadores pertenecientes a diversas universidades, ONGs y administraciones públicas de todo el Estado, reunidos en Pamplona los días 10 y 11 de diciembre de 2009 en un Foro Propositivo, han elaborado, debatido y apoyado esta declaración conjunta para una Estrategia Inclusiva:

Una sociedad injustamente desigual puesta de manifiesto por la crisis

La pobreza y la exclusión social, antes de la crisis y ahora que estamos instalados en ella, es una injusticia social que afecta a la dignidad de las personas y conculca los derechos humanos de un modo inadmisibile en una sociedad que dispone de recursos y

de riqueza suficiente para todos. Debería por ello ser declarada ilegal. Sin embargo, España viene presentando sistemáticamente durante las últimas décadas niveles de desigualdades sociales especialmente elevados en el contexto europeo¹ que se han venido traduciendo en tasas de pobreza relativa cercanas al 20% y de pobreza severa del 3%². El aumento de la población carcelaria y de las demandas en los servicios de salud mental forman parte también de este deterioro de la calidad social. Los procesos de exclusión social afectan al 17,2% de los hogares y la exclusión social más severa al 5,3%³. El desempleo y/o el empleo temporal han sido también especialmente destacados, aumentando y descendiendo alternativamente en las últimas décadas⁴.

Ahora que “los impagos se han multiplicado, las visitas a los bancos de alimentos son cada vez más frecuentes, las colas en los comedores sociales son cada día más largas y está creciendo la visita a la parte trasera de las grandes superficies”⁵, ahora que las solicitudes de rentas mínimas se han disparado en toda España, y que las demandas registradas en las entidades sociales han experimentado un notable aumento en estos dos años⁶, es ineludible que la sociedad española sitúe en un lugar destacado de la agenda el debate de cómo enfrentar la pobreza y la exclusión social crecientes.

Por desgracia, no se ha avanzado significativamente en el largo periodo de bonanza económica para resolver los problemas de crisis social estructural que venimos padeciendo: los niveles de desigualdad social se han mantenido inalterados, las carencias de nuestros sistemas de protección social no han sido resueltos y las mejoras en las condiciones de vida de los más pobres se han debido más al aumento general de los recursos que a una transformación de nuestra estructura social. Reconocemos la importancia social de ciertas medidas, como la mejora del salario mínimo y de las

¹ Un índice de Gini de 31 puntos, 4 puntos más que Francia por ejemplo, en términos de ingresos.

² La ECV ofrece para 2007 una tasa del 19,7% de personas bajo el umbral del 60% de la renta media equivalente de los hogares.

³ El VI Informe Foessa 2008, establece por primera vez una estimación de la exclusión social desde indicadores multidimensionales, económicos, de ciudadanía y de relaciones sociales.

⁴ Cuando el desempleo ha sido más reducido en España, uno de cada tres asalariados tenía un contrato temporal. Ahora, con la reducción en más un millón de los empleos temporales, la tasa de temporalidad se ha reducido significativamente, pero el desempleo se acerca al 20%.

⁵ “El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social”. Informe presentado a la Comisión de estudios del Senado sobre los efectos de la crisis. EAPN-ES. 17 de octubre de 2009

⁶ La demanda registrada en los servicios de atención primaria de Cáritas ha experimentado un aumento del 41% en estos dos años (“La respuesta de Cáritas ante la crisis”. Primer semestre de 2009).

pensiones, así como la reciente extensión extraordinaria de la protección por desempleo, pero estas mejoras han sido tardías, insuficientes y muy parciales.

La llegada a España durante la última década de 5 millones de personas extranjeras ha sido sin duda una de las apuestas más importantes de la sociedad española en mucho tiempo: su acogida, su inserción laboral y la cobertura de sus necesidades básicas, educativas, de salud y vivienda, han supuesto todo un reto para el mercado de trabajo y para los sistemas de protección social. A pesar de los graves problemas que siguen afectando a la población inmigrante, el camino recorrido presenta un balance netamente positivo. Sin embargo, nos enfrentamos ahora a un claro riesgo de retroceso en el proceso de integración social de la población inmigrante, que sólo lograremos enfrentar si la respuesta de la sociedad española, también en estos tiempos de crisis, presenta una coherencia y una responsabilidad equivalente a la relevancia de la apuesta realizada. Si los inmigrantes han estado trabajando con nosotros en estos años, deberán pasar la crisis con nosotros y ayudarnos también a desarrollar los mecanismos de solidaridad y a construir una sociedad más integradora. En el contexto del proceso de envejecimiento, la necesidad de contar con el aporte externo que supone la inmigración extranjera resulta ineludible, al menos si la sociedad española no está dispuesta a ver caer los indicadores generales de renta del país. El objetivo debe seguir siendo integrar a la población inmigrante, no sólo en términos de protección social sino, ante todo, en términos de ciudadanía compartida.

También en este tiempo, la sociedad española ha venido experimentando un proceso de cambio en la situación social de las mujeres, que se ha ido igualando progresivamente a la de los varones, como manifiesta claramente su creciente incorporación al mercado de trabajo. Es éste un avance social incuestionable que no admite retrocesos: los costes sociales de la crisis deberán ser redistribuidos justamente en todos los aspectos, y también en términos de género. La dimensión de género deberá incorporarse en todas las políticas económicas, sociales y de empleo, visibilizando todas aquellas situaciones discriminatorias que se dan por razón de género, para poder avanzar en medidas igualitarias.

Poco cambio sin embargo se ha producido en la discriminación histórica que viene padeciendo la comunidad gitana en España. A pesar de ciertas mejoras en las condiciones de vida, se mantienen unos niveles exagerados de desigualdad social respecto del resto de la sociedad.

En ambos aspectos, de étnia y de género, la discriminación sigue siendo muy notable en nuestra sociedad. Según el último Eurobarómetro dedicado a la discriminación en la UE, el 66% de la población española considera que la

discriminación étnica está muy o bastante extendida, y el 54% piensa lo propio sobre la discriminación por género⁷.

La crisis pues nos pone de manifiesto los problemas estructurales de la sociedad española (y no sólo de su economía): la fragilidad y la precariedad en el empleo, la fuerte desigualdad social, la baja intensidad protectora en los distintos ámbitos ha quedado de manifiesto en esta crisis que por ello está teniendo también peores efectos sociales en España que en otros países europeos. La respuesta a la crisis debería ser por tanto la ocasión para hacer frente con decisión a este déficit estructural de una “España social escasa”: no se trata sólo de lograr un patrón de crecimiento más equilibrado entre los sectores económicos, sino de mejorar la cohesión social, de reducir las desigualdades y de acabar con la pobreza y la exclusión social, al menos en sus expresiones más severas.

La sociedad española se enfrentará en los próximos años a uno de sus principales retos, el envejecimiento acelerado de su población. Al aumento del gasto social derivado del incremento del número de personas en edad de jubilación se unen las consecuencias que la caída de las tasas de natalidad tendrá sobre el volumen de la población en edad potencialmente activa, con un aumento notable de la tasa de dependencia. Se hace así necesario diseñar un plan para prevenir las consecuencias indeseadas de un proceso que en sí mismo es positivo (supone alargar la vida). Este plan ha de tener en consideración la urgente necesidad de aumentar el volumen y la calidad del empleo en nuestro país. Para afrontar el aumento del gasto social derivado del envejecimiento es necesario que aumente la tasa de ocupación de la población española en edad laboral, especialmente entre las mujeres, pero es preciso también que el empleo generado sea de alto valor añadido para sufragar con mayor facilidad el coste del envejecimiento. Una apuesta por el empleo de calidad ha de significar una inversión en la mejora del capital humano y, en consecuencia, una apuesta por desterrar la pobreza infantil y el fracaso escolar, principales lastres para potenciar el nivel formativo de los futuros trabajadores. Un plan orientado a mejorar el capital humano del país ha de servir igualmente para reducir la ratio de pobreza endémica que se ha mantenido constante incluso en los momentos más boyantes de nuestra economía, ya que buena parte de esta pobreza es debida a la poca calidad del empleo generado y los bajos salarios pagados.

⁷ Datos que superan hasta en 4 y 16 puntos respectivamente, los de la percepción en la UE. *Discriminación en la Unión Europea: Percepciones, Experiencias y Actitudes*. Año 2008.

Esta estrategia tiene la ventaja añadida de fomentar el empleo entre las mujeres y de mejorar la entrada de ingresos en los hogares con mayor riesgo de pobreza, ya que es en ellos donde las tasas de actividad laboral femenina son inferiores.

La actual crisis, con el impacto que ha tenido en el sector inmobiliario y de la construcción, plantea la oportunidad única (tal vez última) de modificar la política de vivienda para orientarla a los ciudadanos con necesidades de alojamiento. Con la previsible salida de la crisis de los países de nuestro entorno, los tipos de interés se situarán alrededor del 4-5%, generándose entonces un serio problema (morosidad, impagos, desahucios) a una amplia población hipotecada en situación de vulnerabilidad y de precariedad. Prevenir que esta dinámica devenga en la pérdida de sus viviendas para los sectores más vulnerables debe ser un objetivo básico para evitar nuevos procesos de exclusión.

El impacto de la crisis económica ha puesto de manifiesto también la necesidad ineludible de consolidar una última red de seguridad que haga realidad el derecho de toda la población española a unos recursos mínimos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. La experiencia de algunos sistemas de rentas mínimas autonómicas en los últimos 20 años demuestra la posibilidad de consolidar adecuadamente este objetivo con un coste limitado, situado entre el 0,25 y el 0,35% del PIB.

La Administración Central del Estado y las comunidades autónomas, cada una en su ámbito competencial, tienen la obligación de actuar de forma coordinada en el objetivo de consolidar este sistema de rentas mínimas autonómicas. La definición de unos niveles mínimos comunes para el conjunto del Estado, a financiar por el Estado, debe ser objeto de una iniciativa legislativa conjunta, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y otras normas legales de aplicación.

Por todas estas consideraciones...

1. Exigimos a los poderes públicos, en sus distintos niveles, la puesta en marcha de una estrategia, *real y no virtual*, por la inclusión.

- a) Que, en el nuevo periodo 2010-20, la Unión Europea reactive y refuerce la estrategia por la inclusión, que tan lejos se ha quedado de alcanzar sus objetivos hasta el momento; que la nueva década no sea otra década perdida:
 1. Anteponiendo las personas y el planeta a los beneficios económicos, situando la economía al servicio del desarrollo humano y priorizando la lucha contra la pobreza como estrategia social. Solo así pondremos las bases de una sociedad cohesionada.

-
2. Desarrollando la capacidad legislativa que tiene para elaborar directivas en esta materia y activando sus recursos financieros para avanzar en una Europa más cohesionada socialmente.
 3. Reforzando los mecanismos de evaluación y de control sobre los Estados Miembros en la puesta en marcha de los Planes nacionales de Inclusión.
 4. Incorporando el criterio de la cohesión social en la definición de las grandes políticas económicas (monetaria, industrial, de competencia,...).
- b) Que la Administración Central del Estado lidere en este momento esa estrategia europea por la inclusión y que se vincule decididamente a ella dando ejemplo en determinados aspectos clave:
5. Desarrollando la capacidad legislativa en las políticas sociales para generar y desarrollar un paquete de derechos básicos de ciudadanía social a todas las personas que residen en España.
 6. Aportando recursos suficientes para la financiación de las políticas sociales autonómicas y municipales: un gasto social inferior a la media de la UE-15 en 6,5 puntos del PIB ofrece un importante margen en este sentido.
 7. Olvidándose definitivamente de cualquier tentación electoralista de reducción de impuestos que no se corresponde con las necesidades de recursos públicos que el país presenta.
 8. Potenciando la investigación y el conocimiento de las situaciones de desigualdad social, de pobreza y de exclusión, de tal forma que puedan visibilizarse por el conjunto de la ciudadanía y pueda valorarse su evolución temporal.
 9. Comprometiéndose en el objetivo de garantizar unos ingresos adecuados para todos los ciudadanos y ciudadanas de forma que nadie se encuentre por debajo de una renta equivalente de 600 €(según la composición del hogar):
 - Reformando y articulando el sistema de garantía de ingresos mínimos, desde el subsidio por desempleo o los complementos de mínimos de pensiones hasta las pensiones no contributivas;
 - Ampliando las modalidades de protección, con una atención especial a los hogares con menores de forma que pueda romperse el ciclo de reproducción de la pobreza.
 - Y participando, en coordinación con las comunidades autónomas, en la consolidación del sistema de rentas mínimas autonómicas, en especial en la

dimensión financiera. La articulación de este sistema con las modalidades generales de protección de la Seguridad Social y de la protección al desempleo resulta fundamental.

- Este conjunto de actuaciones debería desarrollarse en un contexto de superación de la actual fragmentación y dispersión del sistema de prestaciones de garantía.
10. Manteniendo el esfuerzo en la mejora progresiva de las pensiones mínimas y del salario mínimo.
 11. Fomentando la escolarización temprana, especialmente para aquellos colectivos más desfavorecidos y ofreciendo una formación diversificada, adaptada a las peculiaridades de todo el alumnado, en especial de aquellos que presentan más dificultades en el rendimiento escolar, como mínimo hasta los 18 años.
 12. Promoviendo una política laboral que reduzca la precariedad.
 13. Desarrollando una política de empleo inclusiva, bonificando los contratos a personas desfavorecidas y potenciando el acceso de mujeres con especiales dificultades al empleo
 14. Potenciando dispositivos de activación eficaces que apliquen itinerarios personalizados de incorporación laboral, y suficientemente prolongados para lograr cualificaciones útiles en el mercado de trabajo. Ello significa apoyar y dotar de recursos a los distintos servicios (de información, orientación y acompañamiento),
 15. Garantizando una formación profesional adaptada y accesible a personas más vulnerables:
 - Con formas de acceso flexibles que no dejen fuera las personas sin titulación previa.
 - Reorganizando y ampliando la oferta actual (con una mejor coordinación): escuelas talleres, talleres de empleo etc., e incluyendo programas de cualificación iniciales adecuados
 - Compromiso de crear 100.000 plazas de aprendizaje para los jóvenes desempleados, de acuerdo con “el compromiso compartido a favor del empleo de la UE”.
 16. Reconociendo competencias profesionales adquiridas por la experiencia
 17. Apoyando la generación de empleo social para colectivos desfavorecidos, con

el desarrollo de la ley 44/2007 de empresas de inserción y contemplando cláusulas sociales y mercados tutelados en los contratos administración pública. En especial se reclama que se aplique en el fondo estatal de inversión local 2009.

18. Apoyando los nuevos nichos de empleo. En particular en la gestión de la ley de dependencia para la incorporación laboral de colectivos vulnerables y potenciar la contratación de empresas de economía social.
19. Dignificando el sector de empleadas del hogar derogando el actual decreto 1424/85, incluyéndolas en el regimen general de la seguridad social con derecho al alta con independencia de las horas trabajadas con los derechos sociales completos.
20. Apoyando la iniciativa emprendedora de las personas en desventaja social, mediante el fomento del autoempleo a través de microcréditos, medidas de acompañamiento⁸ e iniciativas de economía social con tutorización.
21. Orientando la política de vivienda (definida por la intervención coordinada de las administraciones, central, autonómicas y locales) a la cobertura de las necesidades de la ciudadanía en este ámbito y no al crecimiento del sector de la construcción.
 - La política de vivienda debe definirse como un elemento de inclusión social, ya que la vivienda, además de un derecho, es un elemento esencial del desarrollo humano, económico y social.
 - Priorizando las intervenciones sobre la ciudad existente y no sobre nuevos desarrollos que conllevan fuertes impactos medioambientales y exigentes inversiones públicas en sistemas e infraestructuras de transportes y en servicios.
22. Canalizando el gasto de vivienda a través de las ayudas directas a los ciudadanos y de la promoción pública de vivienda, en lugar de con ayudas fiscales para la adquisición de vivienda que han mostrado su carácter regresivo e han incentivado la espiral especulativa.

⁸ De acuerdo con el nuevo instrumento de microcrédito de la UE que se propone en el “compromiso compartido a favor del empleo de la U.E de 3 de junio de 2009.

-
23. Reorientando las ayudas públicas (directas e indirectas) a la vivienda en alquiler (protegida y libre), incrementando y extendiendo las subvenciones a los inquilinos en función de sus condiciones socioeconómicas
 24. Definiendo ayudas públicas específicas para la puesta en uso de la vivienda vacía (desocupada en zonas urbanas y en oferta) como vivienda en alquiler, con ayudas complementarias, en su caso, a la rehabilitación
 25. Concentrando las ayudas públicas (directas y fiscales) a la rehabilitación en las intervenciones sobre conjuntos residenciales “desfavorecidos”, y condicionandolas a su integración con acciones de trabajo social, educación, formación y empleo.
 26. Previendo la pérdida de vivienda por impagos con nuevas ayudas (por ejemplo, subsidiación de tipos de interés), que sirvan para proteger a una población que a los problemas de desempleo podría añadir otros de alojamiento en el futuro.
 27. Definiendo ayudas públicas específicas para la puesta en uso de la vivienda vacía (desocupada en zonas urbanas y en oferta) como vivienda en alquiler, con ayudas complementarias, en su caso, a la rehabilitación
 28. Reconduciendo de nuevo la política migratoria hacia los principios de integración, de convivencia y de ciudadanía, y manteniendo la tendencia de creciente regularización del stock y de los flujos migratorios. En concreto se trataría de evitar la irregularidad sobrevenida de los inmigrantes afectados por el desempleo.
 29. Apostando decididamente por una política antidiscriminatoria que amplíe los niveles de protección legal por diferentes motivos y en los diversos ámbitos, e introduzca medidas efectivas para que la discriminación deje de ser factor de exclusión social.
 30. Revisando la política penitenciaria de forma que se reduzcan las respuestas penales a los problemas sociales y que se desarrollen las alternativas con mayor potencial de rehabilitación y de reinserción social para la población reclusa.
- c) Que las Comunidades Autónomas asuman su responsabilidad como gestoras de una buena parte de las políticas sociales e incorporen una lógica inclusiva en todas ellas:
31. Desarrollando, en coordinación con la Administración del Estado, un sistema de rentas mínimas autonómicas que garantice, desde una perspectiva de derecho, unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de toda

la población. Este sistema deberá tener en cuenta las experiencias históricas de las distintas comunidades autónomas, particularmente en lo relativo a los aspectos siguientes:

- La aplicación del doble derecho a una prestación de garantía y a acciones de apoyo a la inserción, desligando la gestión del sistema de prestaciones de la aplicación de las políticas de inserción, tanto en su dimensión social como laboral. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que tanto la población objeto de atención de ambos tipos de actuaciones como las lógicas y modalidades de aplicación de estos derechos resultan diferentes. Habría que considerar especialmente la situación de las personas que no tienen posibilidades de acceso al empleo, garantizándoles una modalidad de protección no sujeta a controles periódicos ni a exigencias asociadas a un objetivo imposible de inserción laboral, sin perjuicio de la necesidad de seguir garantizando su acceso a los programas generales de apoyo de los servicios sociales.
 - La consideración de un sistema múltiple de prestaciones que incorpore actuaciones orientadas a la cobertura de las necesidades básicas pero también a hacer frente a gastos especiales necesarios para superar la pobreza y el riesgo de exclusión.
 - La introducción de mecanismos de bonificación al empleo.
32. Reforzando un sistema educativo que fomente y anime (incentive) al aprendizaje, que ofrezca oportunidades de mejorar el nivel educativo a lo largo de la vida, en especial a aquellas personas que han abandonado tempranamente el sistema educativo o que tienen niveles de estudios más bajos, con una mayor atención a la diversidad (étnica y social) y desarrollando una educación en valores de respeto y de solidaridad.
33. Desarrollando la capacidad de atención del sistema sanitario a determinados grupos sociales, como las personas sin hogar o las minorías étnicas, así como a determinados ámbitos, como la salud mental, que experimenta una carencia importante de recursos.
34. Reformando las políticas de vivienda en la línea planteada en el apartado anterior, para que lleguen a garantizar el derecho a la misma de todas las personas, especialmente de los grupos más desfavorecidos.
35. Potenciando la capacidad de los servicios sociales para ofrecer apoyos y acompañamiento para el desarrollo personal y la integración en la comunidad, consolidándolos así como un pilar del Estado de bienestar. Ello requiere por un

lado, establecer de forma clara las responsabilidades de los servicios sociales para el conjunto de la población que pueda necesitar de su apoyo, reconociendo derechos subjetivos en unos casos y estableciendo obligaciones de los servicios públicos en otros. Por otro, superar un modelo basado en la gestión de prestaciones (función para la que se tienen que establecerse los mecanismos administrativos oportunos) para orientarlos hacia el acompañamiento continuado y próximo y la participación social.

36. Elaborando, aplicando y evaluando, con todo ello, planes autonómicos de inclusión con medidas concretas, con objetivos precisos y cuantificados y con presupuestos disponibles.

- Estos planes debería ser debatidos y aprobados en los parlamentos autonómicos y ser acompañados por un desarrollo legislativo que reconozca derechos subjetivos a las prestaciones sociales.

37. Diseñando los mecanismos institucionales y los procedimientos adecuados para canalizar la participación de los ciudadanos y ciudadanas, y de las entidades sociales en la identificación de los problemas y en el diseño de las soluciones a las situaciones de exclusión.

d) Que las Entidades Locales asuman su responsabilidad en el desarrollo de esta estrategia inclusiva, garantizando su aplicación efectiva en cada pueblo y en cada barrio:

38. Aplicando con esmero las políticas sociales, en especial en el desarrollo de la red de servicios sociales, y colaborando con el resto de administraciones para que la aplicación de los derechos sociales esté garantizada para todos los vecinos con un acceso efectivo a los recursos.

39. Desarrollando una política urbanística y de ordenación del territorio inclusiva que evite la segregación espacial, permita la accesibilidad de los equipamientos y potencie las interrelaciones sociales.

40. Apoyando el desarrollo del tejido social, creando capital social y capital relacional en el plano local y ofreciendo lugares y oportunidades de encuentro en la diversidad.

2. Pedimos a los agentes económicos y sociales que tengan en cuenta a los sectores excluidos:

41. Una reforma laboral que no reduzca los derechos de los trabajadores y trabajadoras, orientada a superar la fuerte segmentación existente en el

mercado de trabajo, a reducir la precariedad laboral y a mejorar la calidad del empleo de todas las personas trabajadoras, con especial urgencia en aquellos sectores históricamente discriminados en su régimen laboral, y no solo de los sectores más cualificados. Una reforma que debería ser aplicada preferentemente en una fase de crecimiento económico y de creación de empleo.

42. El desarrollo de políticas de conciliación entre la vida (familiar y extrafamiliar) y el trabajo, que incluyan transferencias de compensación y servicios de cuidados universales, flexibles y de calidad, orientadas hacia todos los sectores del mercado de trabajo, incluidos también los que se encuentran al margen del mismo.
43. Un gran pacto para la protección del empleo que garantice que todos aquellos que no tienen empleo cuentan con unos ingresos adecuados para una vida digna, con los servicios de orientación, de formación y de acompañamiento para acceder a nuevas cualificaciones y con ofertas de empleo efectivas antes de convertirse en parados de larga duración.
44. La inclusión en los programas de empleo de mecanismos y apoyos específicos que permitan la incorporación al empleo de los sectores más desfavorecidos, entre los que habrían de incluirse los perceptores de rentas mínimas y los usuarios de los programas de inserción de los servicios sociales. El desarrollo de las empresas de inserción y de los programas de empleo protegido deberían formar parte de los mismos.
45. Una mayor colaboración con el tercer sector que trabaja en el ámbito de la exclusión social a la hora de diseñar y de gestionar las políticas activas de empleo de forma que los intereses de los sectores más desfavorecidos puedan tenerse en consideración adecuadamente.

3. Emplazamos a la sociedad civil a la movilización por una sociedad más cohesionada

46. Que las personas afectadas por procesos de exclusión social hagan valer sus derechos, reclamen lo que consideren necesario y reivindiquen los cambios que consideren adecuados para superar la situación en la que se encuentran y que pidan para ello, si lo consideran necesario y conveniente, el apoyo de las entidades de iniciativa social y de los servicios públicos.
47. Que exijan su participación en todo el proceso de elaboración desarrollo y

control de las políticas públicas que les afectan directamente.

48. Que las entidades de iniciativa social redoblen sus esfuerzos para atender a las necesidades más apremiantes generadas por la crisis, previniendo que las situaciones de exclusión se intensifiquen y se cronifiquen en el futuro.
49. Que sigan siendo “la voz de los sin voz”, desarrollando estrategias de comunicación y de dinamización social orientadas a defender y reclamar los derechos de aquellos sectores que más dificultades sociales tienen. Que, por ello, vean reconocido su papel como interlocutores adecuados para el establecimiento de planes, medidas y políticas de integración social de las situaciones vulnerables y de los colectivos en riesgo de pobreza y exclusión social.
50. Que la ciudadanía apoye y participe activamente en esta estrategia colectiva para el logro de una sociedad más inclusiva.



Erakunde sozial, profesional eta ikertzaileen adierazpena, krisiak iraun bitartean eta ondoren, estrategia inklusibo bat aurrera eramatearen alde.

Urtarrilaren leian hasiko da Pobreziaren eta Bazterketaren aurkako Europar Urtea. Hain zuzen, Espainiak Europar Batasuneko lehendakaritza bere gain hartzearekin batera eta hori guztia krisialdi ekonomiko baten erdian gaudenean, zeinak dagoeneko ondorio larriak izan baititu enplegu suntsiketan eta ondorio nabarmenak izaten ari baita espainiar gizarteko hainbat sektoreren behar oinarritzkoenak areagotzeari dagokionez. Testuinguru honetan, estatuko hainbat unibertsitate, GKE eta administrazio publikoetako berrehundik gora profesional, boluntario eta ikertzailek, 2009ko abenduaren 10 eta 11n Foro Proposatzaile batean bilduta Iruñean, Estrategia Inklusibo baterako adierazpen bateratu hau egin, eztabaidatu eta babestu dute:

Gizarte bidegabeki desberdina, krisiak agerian jarritakoa

Pobrezia eta gizarte bazterketa, bai krisiaren aurretik eta bai krisialdiaren erdian gauden une hauetan ere, gizabanakoen duintasuna kaltetu eta giza eskubideak era onartezinean urratzen dituen gizarte bidegabekeria da, denontzat nahikoa baliabide eta aberastasun dituen gizarte batean. Hori dela eta, legez kontrakotzat jo beharko lukete.

Nolanahi ere, azken hamarkadetan, era sistematikoan, desberdintasun sozial bereziki handiak daude Espainian, Europako testuinguruarekin alderatuz¹. Horrek ondorio gisa ekarri ditu % 20 inguruko pobrezia tasa erlatiboak eta % 3ko pobrezia larriko tasak². Giltzapetuen kopurua igotzeak eta buru osasuneko zerbitzuetan egindako eskaerak areagotzea gizarte kalitatearen okertze horren erakusgarri dira. Gizarte bazterketako prozesuak etheen % 17,2ri eragiten die eta gizarte bazterketa larrienak, berriz, % 5,3ri³. Langabezia eta/edo aldi baterako enplegua bereziki nabarmendu dira, txandaka handiagotu eta txikiagotu baitira azken hamarkadetan⁴.

Orain “ez ordaintzeak ugaritu direnez, jendea gero eta sarriago joaten da elikagaien bankuetara, jantoki sozialetako ilarak gero eta luzeagoak dira eta saltoki handien atzealdera eginiko bisitak areagotzen ari dira”⁵, orain errenta minimoaren eskaerak Espainia osoan asko hazi direnez, bai eta azken bi urteetan nabarmen handitu ere gizarte entitateen laguntza jasotzeko eskaria⁶, espainiar gizarteak lehenbailehen hasi behar du eztabaidatzen nola aurre egin geroz eta handiagoak diren pobrezia eta gizarte bazterketari.

Zoritxarrez, ez da aurrerapen esanguratsurik egin oparoaldi ekonomikoak iraun duen denboraldi luzean, jasaten ari garen egiturazko gizarte krisiaren arazoak konpontzeko: desberdintasun sozialek bere horretan diraude, gure babes sozialeko sistemen gabeziak ez dira konpondu eta txiroenen bizi-baldintzak ez dira hobetu gure egitura soziala aldatu delako, ezpada eskura dauden baliabideak areagotu direlako. Neurri batzuen garrantzi soziala onartzen dugu, hala nola gutxieneko soldata eta pentsioak hobetzea, bai eta langabezia-babesa ezohiko moduan luzatzea ere, baina

¹ 31 puntuko Gini indizea, esaterako Frantziak duena baino 4 puntu gehiagokoa, diru-sarrerei dagokienez.

² Bizi Baldintzei buruzko Inkestaren arabera (ECV), gizabanakoen % 19,7 etxebizitzien batez besteko errentaren % 60ko atalasearen azpitik zegoen 2007an.

³ 2008ko VI. Foessa Txostenak lehen aldiz ezarri du gizarte bazterketaren estimazio bat, alderdi anitzeko adierazleetatik, ekonomia-adierazleetatik, hiritartasun adierazleetatik eta harreman sozialei buruzko adierazleetatik abiatuta.

⁴ Langabezia bere mailarik baxuenean egon denean Espainian, hiru soldatapekoetatik batek aldi baterako kontratua zeukan. Orain, aldi baterako milioi bat lanpostu galdu direnez, nabarmen jaitsi da behin-behinekotasun tasa, baina langabezia % 20ra gerturatu da.

⁵ “El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social”. Senatuko Azterketa Batzordeari aurkeztutako krisiaren ondorioei buruzko txostena. EAPN-ES. 2009ko urriaren 17a.

⁶ Cáritasen lehen arretako zerbitzuen laguntza jasotzeko eskaria % 41 hazi da bi urte hauetan (“La respuesta de Cáritas ante la crisis”. 2009ko lehen seihilekoa).

hobekuntza horiek berandu datoz, ez dira nahikoak eta ez diote arazoari bere osotasunean heltzen.

Azkeneko hamarkadan 5 milioi atzerritar Espainiara etorri izana da, zalantzarik gabe, espainiar gizarteak aspaldian egin duen apusturik handiena: haiek hartu, lanean txertatu eta haien oinarritzko behar eta hezkuntza, osasun eta etxebizitza beharrak estaltzea erronka handia izan dira lan merkatuarentzat eta babes sozialeko sistementzat. Populazio inmigranteak dituen arazo larriak gorabehera, ibilitako bideak emaitza positiboak ekarri ditu. Nolanahi ere, populazio inmigrantea gizartean integratzeko bidean atzera egiteko arriskuaren aurrean gaude orain. Izan ere, arazo horri soilik aurre egiten ahalko baitiogu, krisi garai hauetan ere, espainiar gizarteak bere garaian egindako apustuari dagokion koherentziaz eta arduraz jokatzeko badu. Etorrinak gure artean lanean izan baditugu urte hauetan guztietan, krisia gurekin igaro eta solidaritate mekanismoak garatzen eta gizarte integratzaileago bat eraikitzen lagundu beharko digute. Zahartze-prozesuaren testuinguruan, atzerriko inmigrazioaren ekarpena nahitaezkoa da, espainiar gizarteak herrialdeko errentaren adierazle orokorrak nola jaisten diren ikusi nahi ez badu behintzat. Populazio inmigrantea integratzea da helburua, eta horrela izan behar du aurrenartzean ere bai, ez bakarrik babes sozialari dagokionez, baizik eta, oroz gain, hiritartasun partekatuari dagokionez.

Denbora honetan guztian, emakumearen egoera soziala aldatu egin da espainiar gizartean, gizonenarekin parekatuz pixkanaka, geroz eta emakume gehiago lan merkatuan txertatzeak argi eta garbi erakusten duen bezala. Atzerabueltarik onartzen ez duen eztaba daezinezko aurrerapauso soziala da. Krisiaren kostu sozialak zuzen birbanatu beharko dira alderdi guztietan, eta baita genero kontuetan ere. Genero ikuspegia ekonomia, gizarte eta enplegu politika guztietan txertatu beharko da, genero arazoak direla medio gertatzen diren diskriminaziozko egoera guztiak agerian jarriz, berdintasunaren aldeko neurrietan aurrera egin ahal izateko.

Aldaketa gutxi izan dira, ordea, ijito komunitateak Espainian jasaten duen diskriminazio historikoan. Bizi baldintzak zertxobait hobetu badira ere, desberdintasun sozialak oso handiak dira oraindik ere, gizarteko gainerako kideen egoerarekin alderatuz.

Bi alderdietan, bai etniari eta bai generoari dagokienez, oraindik ere diskriminazio handia dago gure gizartean. Diskriminazioak EBan duen eraginari buruz eginiko azken

Eurobarometroaren arabera, espainiar populazioaren % 66k uste du diskriminazio etnikoa oso edo nahiko hedatua dagoela, eta % 54k iritzi bera du genero-diskriminazioari buruz⁷.

Beraz, krisiak agerian jartzen ditu espainiar gizartearen egiturazko arazoak (eta ez bere ekonomiarenak soilik): enpleguaren hauskortasuna eta egonkortasunik eza, desberdintasun sozial handia, eremu ezberdinetako babes-maila txikia agerian ipina da krisi honetan. Eta, hain zuzen, horregatik ditu krisi honek ondorio sozial larriagoak Espainian Europako beste herrialde batzuetan baino. Beraz, krisiari eman beharreko erantzuna abagune paregabea litzateke erabakimenez aurre egiteko “Espainia sozial eskas” horren egiturazko gabeziari: sektore ekonomikoen arteko hazkunde-eredu orekatuagoa lortu ez ezik, kohesio soziala hobetu, desberdintasunak txikiagotu eta pobrezia eta gizarte bazterketaren arazoa konpondu behar dira, edo haren agerbide bortitzenak gutxienez.

Populazioaren zahartze prozesua bizkortu egingo da hurrengo urteetan, eta arazo horri aurre egitea izango da espainiar gizartearen erronka nagusietako bat. Erretiroa hartzeko adinean dauden gizabanakoen kopurua handitzeak ekarritako gastu sozialaren igoerari gehitzen zaizkio jaiotza-tasa jaisteak izango dituen ondorioak ahalmenez adin aktiboan dagoen populazioaren bolumenean, zeinak ondorio negatiboak izango baititu mendekotasun tasetan. Beraz, nahitaezkoa da plan bat diseinatzea berez (bizia luzatzea dakarrelako) positiboa den prozesu baten ondorio negatiboak aurreikusteko. Plan honek aintzat hartu behar du gure herrialdean enpleguaren bolumena eta kalitatea handiagotzeko aukerak premia larria. Populazioa zahartzeak ekarriko duen gastu sozialaren igoerari aurre egiteko, lan egiteko adinean dagoen espainiar populazioaren enplegu tasek igo behar dute, bereziki emakumeen artean, baina sorturiko enpleguak balio erantsi handikoa izan behar du zahartze kostuak erraztasun handiagoarekin ordaintzeko. Kalitatezko enpleguaren aldeko apustua egiteak ekarri behar du giza kapitala hobetzeko inbertsioa, eta, beraz, haurren pobrezia eta eskola porrota ezabatzearen aldeko apustua, horiek baitira etorkizuneko langileen prestakuntza maila sendotzeko eragozpen nagusiak. Herrialdeko giza kapitala hobetzera bideratutako plan batek balio behar du gure ekonomia hobekien egon den garaietan ere desagertu ez den pobrezia endemikoaren ratioa jaisteko. Izan ere, enpleguaren kalitate txikiaren eta

⁷ Datu horiek 4 eta 16 puntutan gainditzen dituzte, hurrenez hurren, EBko emaitzak. *Diskriminazioa Eurpoar Batasunean: ikusmoldeak, esperientziak eta jarrerak*. 2008. urtea.

ordaindutako lansari txikien ondorio baita pobrezia horren parte handi bat. Estrategia honen abantaila gehigarria da emakumeen enplegua sustatu eta pobrezian jausteko arrisku handiena duten etxeen diru-sarrerak hobetzen dituela, emakumeen lan jarduera tasak txikiagoak baitira haietan.

Egungo krisiak, higiezinaren eta eraikuntzaren arloan izan duen eraginarekin, aukera paregabea eskaintzen du (beharbada azkena) etxebizitza politika aldatu eta egoitzaren premian dauden herritarren beharretara orientatzeko. Aurreikusita dagoen bezala inguruko herrialdeak krisitik ateratzen badira, interes tasak igo egingo dira % 4-5 artean kokatu arte. Orduan arazo larri bati egin beharko dio aurre hipoteka ordaindu behar duen eta egoera ahulean eta ezegonkorrean dagoen populazio multzo zabal batek (berankortasuna, ez ordaintzeak, utzarapenak). Dinamika honen ondorioz sektore ahulenean beren etxebizitzak ez galtzea da oinarrizko helburu bat, bazterketa prozesu berriak saihesteko.

Krisi ekonomikoaren eraginak agerian jarri du, halaber, azken segurtasun sare bat sendotzeko behar saihestezina, zeinak egi bihurtuko baitu espainiar populazio osoak oinarrizko premiei aurre egiteko beharrezkoak diren gutxieneko baliabideak jasotzeko duen eskubidea. Errenta minimo autonomikoen sistema batzuekin azken 20 urteetan izandako esperientziak erakusten du aukera badagoela helburu hori era egokian finkatzeko kostu mugatuarekin, zeina BPGren % 0,25a eta % 0,35a bitartean baitago.

Estatuko Administrazio Zentralak eta autonomia erkidegoek, bakoitzak bere eskumenen esparruan, era koordinatuan jokatzeko betebeharra dute errenta minimo autonomikoen sistema hau egonkortzeko helburuarekin. Estatu osorako komunak izango diren eta Estatuak finantzatuko dituen maila minimo batzuk zehazteko, baterako legegintza ekimen bat egin behar da, Konstituzioan, autonomia estatutuetan eta aplikagarriak diren beste lege-arauetan aurreikusitakoarekin bat etorritik.

Gogoeta horiengatik guztiengatik...

1. Botere publikoei exijitzen diegu, beren maila desberdinetan, inklusioaren aldeko estrategia egiazko eta ez alegiazko bat abiaraztea.

a) 2010-20 aldi berrian, Europar Batasunak suspertu eta indartu dezala inklusioaren aldeko estrategia, zeina oraingoz oso urrun baitago bere helburuak betetzetik;

hamarkada berria ez dadila izan beste hamarkada galdu bat:

1. Gizabanakoak eta planeta mozkin ekonomikoen aurretik jarriz, ekonomia giza garapenaren zerbitzura jarriz eta pobreziaaren aurkako borrokari lehentasuna eman ez estrategia sozial gisa. Soilik horrela jarriko ditugu

gizarte kohesionatu baten oinarriak.

2. Gai honetan zuzentarauak egiteko daukan legegintzako gaitasuna garatuz eta bere finantza baliabideak aktibatuz alderdi sozialetik Europa kohesionatu bat lortzeko bidean aurrera egiteko.
3. Europar Batasuneko estatuen gaineko ebaluazio eta kontrol mekanismoak sendotuz Inklusiorako Plan nazionalak abiarazteko hartzen diren neurrietan.
4. Kohesio sozialaren irizpidea txertatuz politika ekonomiko handien definizioan (txanpon politika, industria politika, lehia politika, etab.)

b) Une honetan, Estatuko Administrazio Zentralak izan behar du inklusioaren aldeko europar estrategia horren buru, eta buru-belarri lotu behar zaio estrategia horri giltzarri diren alderdi jakin batzuetan eredu izanez:

5. Hiritar guztientzat diru-sarrera egokiak bermatzeko konpromisoa hartuz, halako eran non inork ez baitu jasoko 600 euroko errenta baliokidearen azpitik dagoen diru-sarrerarik (familiaren osaeraren arabera):
 - Gutxieneko diru-sarreraren berme sistema berritu eta egituratuz, langabezia sorospenetik edo pentsioen gutxieneko osagarrietatik hasi eta zergari lotu gabeko pentsioetaraino;
 - Babes modalitateak zabalduz, arreta berezia ipiniz adingabekoak dituzten familiei, halako eran non pobrezia birsortze zikloa hautsiko baita.
 - Eta, autonomia erkidegoekin lankidetzan, errenta minimo autonomikoen sistema egonkortzeko ahaleginetan parte hartuz, bereziki alderdi finantzarioan. Funtsezkoa da sistema hau Gizarte Segurantzaren babes modalitate orokorrekin eta langabezia-babesarekin lotzea.
 - Jarduera multzo hau garatu beharko litzateke berme prestazioen sistemaren egungo zatiketa eta sakabanaketa gainditzen dituen testuinguru batean.
6. Gutxieneko pentsio eta soldatak pixkanaka hobetzeko ahaleginari eutsiz.
7. Eskolatzeko goiztiarra sustatuz, bereziki gizarte-egoera ahulenean dauden kolektiboentzat, eta prestakuntza dibertsifikatua eskainiz, ikasle guztien berezitasunei egokitua, bereziki eskola-errendimenduan zailtasun gehien dituzten ikasleen berezitasunei, gutxienez 18 urte bete arte.
8. Egonkortasunik eza murriztuko duen lan politika sustatuz.
9. Enplegu politika inklusiboa sustatuz, gizarte-egoera ahulean dauden pertsonen kontratuei hobariak emanez eta zailtasun bereziak dituzten

emakumeak lan merkatuan txertatzea bultzatuz.

10. Laneratzeko ibilbide pertsonalizatuak ezarriko dituzten aktibatze neurri eraginkorrak indartzuz, eta lan merkatuan trebakuntza erabilgarriak lortzeko behar adina luzatuko direnak denboran. Horretarako zerbitzu desberdinei (informazioa, orientazioa eta laguntza emateko zerbitzuak) laguntza eta baliabideak eman behar zaizkie.
11. Egoera ahulean dauden pertsonen lanbide heziketa egokitu eta ulerterraza bermatuz:
 - Aldez aurretiko titulaziorik gabeko pertsonak kanpoan utziko ez dituzten sarbideekin.
 - Egungo eskaintza berrantolatu eta zabalduz (lankidetzak hobearekin): ikastetxeak, lantegiak, enplegu lantegiak, etab., eta hasierako kualifikazio programa egokiak sartuz
 - Gazte langabetuentzat 100.000 ikaspostu sortzeko konpromisoa, “EBren enpleguaren aldeko konpromiso partekatuarekin” bat etorriz.
12. Esperientziarekin eskuratutako gaitasun profesionalak aitortuz
13. Gizarte-egoera ahuleko taldeentzat enplegu soziala sortzea bultzatuz, lanean txertatzeko enpresei buruzko 44/2007 legea garatuz eta klausula sozialak eta merkatu tutelatuak aurreikusiz administrazio publikoekin egindako kontratuetan. 2009 toki inbertsiorako estatu funtsean aplikatzea eskatzen da bereziki.
14. Enplegu zoko berriak lagunduz. Bereziki mendekotasun legearen kudeaketan gizarte-egoera ahulean dauden kolektiboak lanean txertatzeko eta ekonomia sozialeko enpresen kontratazioa indartzeko.
15. Etxeko langileen arloa duinduz, egungo 1424/85 dekretua indargabetuz eta langile horiek gizarte segurantzako erregimen orokorrean sartuz alta hartzeko eskubidearekin, lan egindako orduak alde batera utzita, eskubide sozial guztiekin.
16. Desabantaila sozialak dituzten pertsonen ekimen ekintzaileei lagunduz,

autoenplegua sustatuz mikrokreditu, batera doazen neurri⁸ eta tutoretzapean dauden ekonomia sozialeko ekimenekin.

17. Etxebizitza politika eraikuntza arloaren hazkundera orientatu ordez, herritarrek etxebizitzaren arloan dituzten premiak estaltzera orientatuz. Etxebizitza politika (administrazio zentral, administrazio autonomiko eta toki-administrazioen esku-hartze koordinatuak definitzen duena) inklusio sozialerako elementu gisa definitu behar da, etxebizitza, eskubide bat izateaz gainera, giza, ekonomia eta gizarte garapenaren funtsezko elementua baita.
18. Lehendik daukagun hiriarri buruzko esku-hartzeei lehentasuna emanaz, ingurumen-eragin handiak eta hala garraio sistema eta azpiegituretan nola zerbitzuetan inbertsio publiko gogorrek dakartzaten garapen berriei eman ordez.
19. Etxebizitza-gastua bideratuz herritarrei ematen zaizkien zuzeneko laguntzen bidez eta etxebizitzaren sustapen publikoaren bidez, etxebizitza eskuratzeko laguntza fiskalen bidez bideratu ordez, zeinek gutxiagotzeko joera erakutsi eta espekulazioa sustatu baitute.
20. Laguntza publikoak (zuzenekoak eta zeharkakoak) alokairuko etxebizitzara orientatuz berriro (babestua eta libre), maiezterrei zuzendutako diru-laguntzak gehitu eta hedatuz beren baldintza sozioekonomikoen arabera.
21. Etxebizitza hutsa (hutsik, hiri eremuetan eta salgai dagoena) alokairuko etxebizitza gisa erabiltzeko laguntza publiko berariazkoak definituz, beharrezkoa balitz, etxebizitzak zaharberritzeko laguntza osagarriekin.
22. Zaharberritzeko laguntza publikoak (zuzenak eta fiskalak) “egoera ahulean” dauden bizitegi-multzoei buruzko esku-hartzeetara bideratuz, eta esku-hartze horiek gizarte-lan, hezkuntza, prestakuntza eta enplegu arloko jarduerekin batera egiteko baldintza ipiniz.
23. Etxebizitza ordainketak ez egiteagatik etxea galtzeko arriskua aurreikusi eta beste laguntza batzuk emanaz (esaterako, interes tasetarako laguntzak), zeinak baliagarriak izango baitira, etorkizunean, langabezia-arazoez gainera

⁸ “EBren enpleguaren aldeko konpromiso partekatuak,” 2009ko ekainaren 3koak, proposatzen duen EBren mikrokredituetarako tresna berriarekin bat etorritz.

etxebizitza-arazoak izan ditzakeen populazioa babesteko.

24. Etxebizitza hutsak (hutsik, hiri eremuetan eta salgai daudenak) alokairuko etxebizitza gisa erabiltzeko laguntza publiko berariazkoak definituz. Laguntza horiek zaharberritzeko laguntzen osagarriak lirateke, halakorik balego.
25. Legegintzako gaitasuna garatuz politika sozialetan, Espainian bizi diren pertsona guztientzat hiritartasun sozialari buruzko oinarrizko eskubide multzo bat sortu eta garatzeko.
26. Politika sozialak, politika autonomikoak eta udal politikak finantzatzeko beharrezkoak diren finantza baliabideak emanaz: EB-15 delakoaren batez besteko gastua baino txikiagoa den gastu sozialak –BPGaren 6,5 puntu txikiagoa– aukera handia ematen du ildo honetan.
27. Behin betiko ahaztuz zergak jaisteko edozein hauteskunde-tentaldi ez baitator bat herrialdeak dituen baliabide publikoen premiekin.
28. Migrazio-politika integrazio, bizikidetzeta eta hiritartasun printzipioetara bideratuz berriro eta migrazio stockaren eta fluxuen geroz eta erregularizazio handiagoaren bidetik jotzeko joerari eutsiz. Zehazki, langabezia dauden etorkinen artean gerora sortutako irregulartasuna saihestea litzateke kontua.
29. Diskriminazioaren aurkako politika baten aldeko apustua egitea erabakitasunez, zeinak hainbat arlotan eta arrazoi ezberdinengatik ematen den legezko babesa handiagotu eta neurri eraginkorrak ezarriko baititu, gizarte bazterketarako arrazoi izateari utz diezaion diskriminazioak.
30. Ikerketa sustatuz eta baita desberdintasun sozial, pobrezia eta bazterketa egoeren ezagutza ere, halako eran non herritarrak egoeraz jabetu eta honek denboran zehar duen bilakaera balioetsi ahalko baita.

c) Autonomia erkidegoek beren gain har dezatela politika sozialen parte handi bat kudeatzeko ardura eta ezarri dezatela politika horietan guztietan logika inklusibo bat:

31. Estatuko Administrazioarekin lankidetzan, errenta minimo autonomikoen sistema bat garatuz, zeinak populazioaren oinarrizko premiak betetzeko beharrezkoak diren diru-sarrerak bermatuko baititu zuzenbidearen ikuspegitik. Sistema honek aintzat hartu behar ditu autonomia erkidegoen esperientzia historikoak, bereziki alderdi hauei dagokien guztian:
 - Berme prestaziorako eta gizarteratzen laguntzeko jardueretarako eskubide bikoitzaren aplikazioa, prestazio sistemaren kudeaketa gizarteratze politiken aplikazioarengandik bereiziz, bai haren dimentsio sozialean eta bai lan

dimentsioan ere. Kontuan hartu behar da, ildo honetan, bai bi jarduera mota horien arretagunea den populazioa eta bai eskubide hauen logika eta aplikazio-modalitateak ere ezberdinak direla. Arreta bereziz aztertu beharko litzateke lanpostua lortzeko aukerarik ez duten pertsonen egoera, eta horiei babes modalitate bat bermatu behar zaie, zeinetan ez baitituzte edukiko aldizkako kontrolak ez eta lanean txertatzeko helburu ezinezko baten eskakizunak; nolana ere, horrek ez die galaraziko zerbitzu sozialen laguntza orokorretarako sarbidea bermatua izaten jarraitzea.

- Prestazioen sistema anitz bat ezartzea, oinarrizko premiak betetzera eta pobrezia eta bazterketa arriskua gainditzeko beharrezkoak diren gastu bereziei aurre egitera orientatutako jarduerak aurreikusiko dituen.
 - Enplegurako hobari mekanismoak sartzea.
32. Ikaskuntza bultzatu eta animatu (sustatu) eta bereziki hezkuntza sistema era goiztiarrean utzi edo ikasketa maila apalagoa dutenei bizitza osoan zehar heziketa maila hobetzen laguntzeko aukerak eskainiko dizkien hezkuntza sistema bat sendotuz, aniztasunari (etniko eta soziala) arreta handiagoa eskainiz eta begirune eta solidaritate balioetan oinarrituriko hezkuntza garatuz.
 33. Talde sozial jakin batzuei, hala nola etxerik gabeko pertsoneri edo gutxiengo etnikoei, eta arlo jakin batzuetan, hala nola osasun mentalaren arloan, zeinak baliabide gabezia handia baitauka, arreta emateko osasun sistemak daukan gaitasuna garatuz.
 34. Etxebizitza politikak aldatuz lehen proposatutako ildotik (17. puntutik 24. puntura arte), pertsona guztiek eta bereziki gizarte-egoera ahulenean dauden taldeek etxebizitzarako duten eskubidea bermatzearen.
 35. Gizarte zerbitzuek garapen pertsonalerako eta komunitatean integratzeko laguntza eta sostengua eskaintzeko daukaten gaitasuna indartuz, zerbitzu horiek ongizatearen estatuaren euskarri gisa finkatuz. Horrek eskatzen du, batetik, argi eta garbi zehaztea gizarte zerbitzuen ardurak haien laguntzaren beharrea gerta daitekeen populazioarentzat, eskubide subjektiboak aldarrikatuz kasu batzuetan eta zerbitzu publikoen betebeharrak ezarriz beste batzuetan. Bestetik, prestazioen kudeaketan oinarritutako eredia gainditzea (dagozkion administrazio-mekanismoak ezarri behar dira eginkizun horretarako) laguntza iraunkor eta hurbilerantz eta parte-hartze sozialerantz orientatzeko.
 36. Horrekin guztiarekin neurri jakinak, helburu zehatz eta kuantifikatuak eta

aurrekontu erabilgarriak izango dituzten inklusiorako plan autonomikoak prestatu, aplikatu eta ebaluatuz.

- Plan horiek legebiltzar autonomikoetan eztabaidatu eta onetsi beharko lirateke, bai eta prestazio sozialei eskubide subjektiboak aitortuko dizkieten legeen bidez garatu ere.

37. Erakunde mekanismo eta prozedura egokiak diseinatzuz, herritarrek eta entitate sozialek arazoan identifikazioan eta bazterketa-egoerei eman beharreko konponbideen diseinuan parte-har dezaten.

d) Toki entitateek bere gain har dezatela estrategia inklusibo hau garatzeko ardura, herri eta auzo guztietan eraginkortasunez aplikatzen dela bermatuz:

38. Politika sozialak arduraz aplikatuz, bereziki zerbitzu sozialetako sarearen garapenean, eta gainerako administrazioekin lankidetzan jardunez, biztanle guztiei eskubide sozialen aplikazioa bermatzeko baliabideak eraginkortasunez erabiltzeko aukera eskainiz.

39. Espazio bereizketa saihestu, ekipamenduen irisgarritasuna ahalbidetu eta harreman sozialak indartuko dituen hirigintza eta lurralde antolamenduko politika inklusibo bat garatuz.

40. Sare sozialaren garapena bultzatuz, kapital soziala eta kapital erlazionala sortuz toki erakundeen arloan, eta aniztasunean elkartzeko tokiak eta aukerak eskainiz.

2. Baztertutako sektoreak aintzat hartzeko eskatzen diegu ekonomia- eta gizarte-eragileei:

41. Langileen eskubideak murriztuko ez dituen erreforma bat, ondoko helburu hauek lortzera zuzendua: lan merkatuan dagoen segmentazio handia gainditzea, lanaren egonkortasunik eza murriztea eta, sektore kualifikatuenetako langileen enpleguaren kalitatea ez ezik, langile guztien enpleguaren kalitatea hobetzea, ahalegin berezia eginez historian zehar beren lan araubidean bazterkeria jasan duten sektoreetan. Erreforma hori, batez ere, ekonomia hazkundeko eta enplegu sorkuntzako aldi batean ezarri beharko litzateke.

42. Bizitza (familia bizitza eta familiaz kanpokoa) eta lana bateragarri egiteko politikak garatzea. Politika horien barnean kokatzen dira konpentsazio transferentziak eta artapen unibertsal, malgu eta kalitatekoen zerbitzuak, lan merkatuko arlo guztietara orientatuak, lan merkatutik kanpo daudenetara

barne.

43. Enplegua babesteko hitzarmen handi bat, lanposturik ez duten guztiek bizimodu duina eramateko beharrezkoak diren diru-sarrerak, kualifikazio berrietara sartzeko orientazio, prestakuntza eta laguntza zerbitzuak eta iraupen luzeko langabetu bihurtu baino lehen lan eskaintza eraginkorrak dituztela bermatzeko.
44. Egoera ahulenean dauden sektoreak lan merkatuan sartzera ahalbidetuko duten mekanismo eta laguntza berariazkoak aurreikustea enplegu programetan. Sektore horien barnean kokatu beharko lirateke errenta minimoak jasotzen dituztenak eta zerbitzu sozialetako gizarteratze programen erabiltzaileak. Lanean txertatzeko programen eta enplegu babesteko programen garapenak haietan egon beharko luke.
45. Bazterketa sozialaren eremuan lan egiten duen hirugarren sektorearekin lankidetzaren handiagoa enplegu politika aktiboak diseinatu eta kudeatzerako garaian, halako eran non gizarte-egoera ahulenean dauden sektoreen interesak behar den moduan har daitezzen aintzat.

3. Gizarte kohesionatuago baten alde mobilizatzeko deia egiten diogu gizarte zibilari

46. Gizarte bazterketako prozesuek eragindako pertsonen beren eskubideak defendatu, beharrezkotzat hartzen dutena eskatu eta egoki jotzen dituzten aldaketak aldarrikatu ditzatela dauden egoera gainditzeko, eta eska ditzatela horretarako, beharrezkotzat eta egoki jotzen badute, ekimen sozialeko entitateen eta zerbitzu publikoen laguntza.
47. Exiji dezatela garatutako prestakuntza prozesu osoan parte-hartzea eta zuzenean eragiten dieten politika publikoen kontrola.
48. Ekimen sozialeko entitateak gehiago ahalegindu daitezela krisiak sortutako behar larrienei erantzuteko, etorkizunean bazterketa-egoerak areago eta kroniko bihurtu ez daitezzen.
49. “Ahotsik gabekoen ahotsa” izaten segi dezatela, zailtasun sozial gehien dituzten sektoreen orientatutako komunikazio eta dinamizazio estrategiak garatuz. Hori dela eta, solaskide egokitzat hartuak izan daitezela egoera ahulen eta pobrezian eta bazterketa sozialean jausteko arriskuan dauden kolektiboaren integrazio soziala lortzeko plan, neurri eta politikak ezartzeko.
50. Herritarrek bultzatzea eta era aktiboan parte har dezatela gizarte inklusiboago

baten aldeko estrategia kolektibo honetan.



Manifesto by social entities, professionals and research staff for an inclusive strategy during and after the crisis.

The European Year against Poverty and Exclusion begins on January 1st, coinciding with Spain's EU Presidency, against a background of economic crisis that has already had dramatic effects on the destruction of employment and is having important consequences on an increasing number of the most basic needs affecting broad sectors of Spanish society and especially the most underprivileged groups. In this context, two hundred professionals, volunteers and researchers from different universities, NGOs and public administrations from throughout Spain, met in Pamplona on 10th and 11th December 2009 at a Proactive Forum to draft, discuss and support this joint manifesto for an Inclusive Strategy:

An unfairly unequal society revealed by the crisis

Poverty and social exclusion, before the crisis and now that we are immersed in it, are a form of social injustice that affects the dignity of people and violate human rights in a way that is unacceptable in a society with enough resources and wealth for everyone. It should, therefore, be declared illegal. However, in recent decades, Spain

has systematically been displaying particularly high levels of social inequality in the context of Europe¹ which have translated into relative poverty levels close to 20% and severe poverty rates of 3%². The increase in the prison population and demands on mental health services are also part of this deterioration of social quality. Processes of social exclusion affect 17.2% of homes and 5.3% in terms of the most severe social exclusion³. Unemployment and/or temporary employment have also been particularly salient features, rising and falling alternatively in recent decades⁴.

Now that “defaulting payments have multiplied, visits to food banks are becoming increasingly frequent, queues for social kitchens are increasingly longer and visits are increasing to the back of large stores”⁵, now that applications for income support are through the roof in Spain, and the demands registered by social organisations have experienced a significant increase in the past two years⁶, Spanish society must unavoidably put the debate about how to tackle growing poverty and social exclusion high on its agenda.

Unfortunately, no significant progress was made in the long period of economic boom to resolve the structural social crisis problems we have been experiencing: levels

¹ A Gini index of 31 points, 4 points higher than France, for example, in terms of earnings.

² For the year 2007, the ECV gives a figure of 19.7% for persons under the 60% threshold of the equivalent average income of homes.

³ The VI Foessa Report 2008 establishes for the first time an estimation of social exclusion using multidimensional, economic, citizenship and social relations indicators.

⁴ When unemployment has been lower in Spain, one out of every three wage earners had a temporary contract. Now, with the reduction of over a million temporary jobs, the temporary employment rate has fallen significantly, but unemployment is close to 20%.

⁵ “The impact of the crisis on poverty and social exclusion”. Report presented to the Senate Study Commission about the effects of the crisis. EAPN-ES. 17th October 2009

⁶ The demand registered by the primary care services of Cáritas has experienced an increase of 41% in these two years (“Cáritas’ response to the crisis”. First Semester 2009).

of social inequality have remained unchanged, the deficiencies in our systems of social protection have not been resolved and improvements in the living conditions of the poorest sectors of society are mainly due to the general increase in recourses rather than a transformation of our social structure. We recognise the social importance of certain measures, and the improvements made to the minimum wage and pensions, as well as the recent extraordinary expansion of unemployment protection, but these improvements have been too little too late and very partial.

The arrival of 5 million foreign people in Spain over the last decade has undoubtedly been one of the most important endeavours of Spanish society in a long time: their integration, employment and covering their basic needs as regards education, health and housing, have been quite a challenge for the job market and the social protection systems. In spite of the serious problems that continue to affect the immigrant population, the achievements on the whole are positive. However, we are now facing a clear risk of sliding backwards in the social integration of the immigrant population, which we will only manage to tackle if in these times of crisis Spanish society responds as coherently and responsibly as it has done in the past. If immigrants have been working with us all these years, they must get through the crisis with us and also help us to develop mechanisms of solidarity and build a more integrating society. In the context of the ageing process, the need for the external contribution of foreign immigration is unavoidable, at least if Spanish society is not willing to see the general income indicators for the country fall. The aim must continue to be to integrate the immigrant population, not only in terms of social protection but, above all, in terms of shared citizenship.

Also during this time, Spanish society has been undergoing a process of change in the social situation of women, which has been progressively raised to the level of men, as clearly shown by their growing incorporation into the job market. This is an unquestionable social advance and we cannot go back: the social costs of the crisis must be evenly distributed in all aspects, including gender. The gender dimension must be incorporated into all economic, social and employment policies, showing up all

situations of discrimination on the grounds of gender, in order to make progress in egalitarian measures.

Little progress has been made, however, in the historic discrimination against the gypsy community in Spain. In spite of certain improvements in living conditions, exaggerated levels of social inequality persist in contrast to the rest of society.

In both aspects, ethnic background and gender, discrimination is still significant in our society. According to the latest Eurobarometer measuring discrimination in the EU, 66% of the Spanish population feels ethnic discrimination is still fairly or very widespread, and 54% thinks the same about gender discrimination⁷.

The crisis therefore reveals the structural problems of Spanish society (and not just of its economy): the fragility and precariousness of employment, major social inequality, low levels of protection in different spheres have all been highlighted in this crisis, which is having therefore graver social effects in Spain than in other countries. The response to the crisis should therefore be an occasion to decisively tackle this structural deficit of a “barely social Spain”: it is not just about achieving a more balanced growth pattern between the economic sectors, but also about improving social cohesion, reducing inequalities and eradicating poverty and social exclusion, at least in its most severe expressions.

Over the coming years, Spanish society will face one of its biggest challenges: the accelerated ageing of its population. In addition to the higher social cost of the rising number of people of retirement age, the falling birth rate will have consequences on the size of the potentially employed population, with a significant increase in the rate of dependency. Hence, a plan must be designed to prevent undesired consequences of a

⁷ Figures that are 4 and 16 points higher, respectively, than the perception in the EU. *Discrimination in the European Union. Perceptions, Experiences and Attitudes*. Year 2008.

process that is in itself positive (a longer life). This plan must take into consideration the urgent need to increase the volume and quality of employment in our country. To tackle the increased social cost derived from ageing, the rate of employment must be increased in the Spanish population of working age, especially among women, but the employment created must also be of high added value to cover the cost of ageing more comfortably. A commitment to employment must invest in the improvement of human capital and, therefore, entails a commitment to eradicating child poverty and academic failure, the main obstacles to improving the training and preparation of future workers. A plan aimed at improving the country's human capital must also reduce that ratio of endemic poverty that has remained constant even in the most buoyant moments of our economy, since much of this poverty is due to the low quality of employment generated and the low salaries paid. The advantage of this strategy is that it fosters employment among women and improves the level of earnings coming into homes with the greatest risk of poverty, since this is where the rates of employment among women are lower.

The current crisis, with the impact it has had on the property and construction sector, offers a unique (and perhaps the last) opportunity to modify housing policies to focus on citizens with accommodation needs. With our neighbouring countries foreseeably emerging from the crisis, interest rates will be set at around 4–5%, thereby creating a serious problem (defaulting loans, non-payments, evictions) and putting a broad section of the mortgaged population in a situation of vulnerability and precariousness. Preventing this dynamic from turning into the loss of their homes for the most vulnerable sectors must be a basic goal to avoid new processes of exclusion.

The impact of the economic crisis has also revealed the inescapable need to secure an ultimate safety net that makes a reality of the right of the whole Spanish population to minimum earnings sufficient to cover basic needs. The experience of the regional income support systems set up in the last 20 years demonstrates the possibility of consolidating this objective adequately with a limited cost, situated between 0.25 and 0.35% of the GDP.

Central and regional governments, each within their own sphere of competence, have the obligation to act in coordination with a view to consolidating these regional

income support systems. The definition of minimum common levels for the State as a whole, to be financed by the State, must be the object of a joint legislative initiative, in accordance with the Constitution, the Statutes of Autonomy and other applicable regulations.

On the basis of all these considerations...

1. We demand that the public powers, at different levels, launch a strategy - *real and not virtual* - to achieve inclusion.

- a) In the new period 2010-20, the European Union must reactivate and strengthen its strategy for inclusion, which has far from achieved its goals so far; the new decade should not be another lost decade:
1. Putting people and the planet before economic profits, putting the economy at the service of human development and prioritising the fight against poverty as a social strategy. Only then can we lay the foundations for a cohesive society.
 2. Developing legislative capacity to draw up directives in this area and activating financial resources to move towards a more socially cohesive Europe.
 3. Reinforcing the mechanisms of evaluation and control over Member States in the implementation of National Inclusion Plans.
 4. Incorporating the criterion of social cohesion in the definition of major economic policies (monetary, industrial, competition,...).
- b) Central Government should now lead this European strategy for inclusion and be linked strongly to it, leading by example in certain key aspects:
5. Developing legislative capacity in social policies to generate and develop a package of basic social citizenship rights for all people living in Spain.
 6. Providing sufficient resources to fund regional and local social policies: a lower social cost by 6.5 GDP points than the EU-15 average offers an important margin in this respect.

-
7. Forgetting definitively any vote-catching temptation to lower taxes that does not correspond to the country's need for public resources.
 8. Promoting research and knowledge of situations of social inequality, poverty and exclusion, so they are visible to all citizens and their evolution over time can be valued.
 9. Guaranteeing adequate earnings for all citizens so no one receives an income of less than €600 (depending on the household):
 - Reforming and structuring the minimum income system, from jobseekers' allowance to pension credit and non-contributory pensions or income support.
 - Extending protection modes, paying particular attention to homes with children so they can break the reproduction cycle of poverty.
 - And participating, in coordination with the autonomous regions, in the consolidation of regional income support systems, particularly in the financial sphere. The structuring of this system with general protection through Social Security and unemployment protection is fundamental.
 - This series of actions must be developed within the context of overcoming the current fragmentation and dispersion of the benefits system.
 10. Maintaining endeavours in the progressive improvement of minimum pensions and the minimum wage.
 11. Encouraging early schooling, especially for more underprivileged collectives, and offering diversified training for everyone, especially those with academic difficulties, at least until the age of 18.
 12. Promoting labour policies that reduce precariousness.
 13. Developing an inclusive employment policy, improving contracts for underprivileged people and promoting access to employment for women with special difficulties.

-
14. Promoting effective mechanisms of activation that apply personalised labour incorporation pathways, and long enough to achieve useful qualifications in the job market. This means supporting and providing resources for different services (information, guidance and support),
 15. Guaranteeing professional training that is adapted and accessible to more vulnerable people:
 - With accessible flexible pathways that do not exclude people without prior qualifications.
 - Reorganising and expanding the current offer (with improved coordination): courses, employment workshops, etc., and including adequate initial qualification programmes
 - Commitment to create 100,000 apprenticeships for young unemployed people, in accordance with the “EU’s shared commitment in favour of employment”.
 16. Recognising professional skills acquired through experience
 17. Supporting the generation of social employment for underprivileged collectives, with the development of Act 44/2007 concerning insertion companies and contemplating social clauses and supervised markets in public administration contracts. In particular, it must be applied to the state fund for local investment 2009.
 18. Supporting new employment niches, particularly when managing the dependency act for the occupational incorporation of vulnerable collectives and promoting the contracting of social economic companies.
 19. Dignifying the domestic employment sector by repealing the current decree 1424/85, including these employees in the general social security regime with the right to pay social security regardless of the number of hours work, with full social rights.
 20. Supporting the entrepreneurial initiatives of socially disadvantaged people, by

encouraging self-employment through micro-credits, support measures⁸ and monitored social economy initiatives.

21. Guiding housing policy (defined by the coordinated intervention of central, regional and local governments) to cover the needs of citizens in this area and not towards the growth of the construction sector.
 - Housing policy must be defined as an element of social inclusion, since, as well as a right, a home is an essential element in human, economic and social development.
 - Prioritising interventions in relation to the existing city and not new developments that cause major environmental impacts and entail demanding public investments in transport systems and infrastructures and services.
22. Channelling the cost of housing through direct subsidies offered to citizens and the public development of property, instead of fiscal incentives for property acquisitions, which have proven to be regressive and have fostered the speculative spiral.
23. Refocusing public funding (direct and indirect) towards rented properties (rent controlled and otherwise), increasing and extending subsidies to tenants depending on their socioeconomic conditions.
24. Defining specific public funding to encourage the use of empty housing (unoccupied in urban areas and for sale) as rental properties, with additional subsidies, if required, for renovation.
25. Concentrating public funding (direct and fiscal) on renovation in interventions

⁸ In accordance with the new EU microcredit instrument proposed in the “EU shared commitment in favour of employment” of 3rd June 2009.

relating to ‘underprivileged’ residential areas and preparing them for integration through social work actions, education, training and employment.

26. Preventing the loss of housing because of non-payment with new funding (for example, subsidising interest rates), to protect people with unemployment problems from also having to deal with housing problems in the future.
 27. Defining specific public funding to encourage the use of empty housing (unoccupied in urban areas and for sale) as rental properties, with additional subsidies, if required, for renovation.
 28. Redirecting migratory policy back towards principles of integration, coexistence and citizenship, maintaining the trend of increasing regularisation of stock and migratory flows. Specifically, the aim should be to avoid the irregularity that affects immigrants due to unemployment.
 29. Making a determined commitment to anti-discrimination policy that increases the levels of legal protection offered for different reasons and in different spheres, and introducing effective measures so that discrimination is no longer a factor in social exclusion.
 30. Reviewing penitentiary policy to reduce penal responses to social problems and developing alternatives with greater potential for the rehabilitation and social reinsertion of the prisoner population.
- c) Autonomous Regions must accept their responsibility in the management of many social policies and incorporate an inclusive logic in all of them:
31. Developing, in coordination with Central Government, a regional income support system that guarantees, from a legal perspective, sufficient income to cover the basic needs of the whole population. This system must take into account the historic experiences of the different autonomous regions, particularly in relation to the following aspects:
 - The application of the double right to benefits and insertion support, separating the management of the benefits system from the application of

insertion policies in both its social and occupational dimensions. It must also be taken into account that the population affected by both types of action and the logics and modes of application of these rights are different. One would especially have to consider the situation of people who are unable to access employment, guaranteeing a mode of protection not subject to periodic controls or requirements tied into an impossible objective of occupational insertion, notwithstanding the need to continue guaranteeing their access to general social service support programmes.

- The consideration of a multiple system of benefits that incorporates actions aimed at meeting basic needs but also at tackling special costs required to overcome poverty and the risk of exclusion.
 - The introduction of employment allowance mechanisms.
32. Reinforce the educational system to foster and encourage (incentivise) learning so that it offers opportunities to improve educational levels throughout people's lives, especially those who have left the education system early, or who have lower educational levels, with particular attention paid to diversity (ethnic and social) and educating in the values of respect and solidarity.
 33. Developing the capacity of the healthcare system to deal with certain social groups, such as the homeless or ethnic minorities, as well as in specific areas, such as mental health, which suffers from a major lack of funding.
 34. Reforming housing policies along the lines described in the previous section, so they guarantee everyone's right to housing, especially the most underprivileged groups.
 35. Developing the capacity of social services to offer support in personal development and integration into the community, thereby consolidating these services as a pillar of the Welfare State. This requires, on the one hand, the clear establishment of the responsibilities of social services for the whole population that might need their support, recognising subjective rights in some cases and establishing obligations for public services in others. Furthermore,

we must move away from a model based on the management of benefits (a function for which the relevant administrative mechanisms must be established) towards ongoing and close support and social participation.

36. Drawing up, applying and evaluating regional inclusion plans with specific measures, precise and quantified targets and available budgets.

- These plans must be debated and approved in regional parliaments and must be accompanied by legislative development that recognises subjective rights to social benefits.

37. Designing the right institutional mechanisms and procedures to channel the participation of citizens and social entities in the identification of problems and the design of solutions for situations of exclusion.

d) Local Governments must accept their responsibility in the development of an inclusive strategy, guaranteeing its effective application in each town and neighbourhood:

38. Carefully applying social policies, particularly in the development of the social services network, and collaborating with other administrations to guarantee the application of social rights to all residents through effective access to resources.

39. Developing an inclusive urban planning and territorial organisation policy that avoids spatial segregation, permits access to equipment and promotes social interrelations.

40. Supporting the development of the social fabric, creating social capital and relational capital in the local sphere and offering places and opportunities for encounters with diversity.

2. We are asking economic and social agents to take excluded sectors into account:

41. Through labour reforms that do not reduce the rights of workers, aimed at overcoming the strong segmentation that exists in the job market, reducing job

precariousness and improving the quality of employment for all workers, with particular urgency in sectors that have been historically discriminated against in their work, and not just for the most qualified sectors. Reforms that must preferably be applied in a period of economic growth and job creation.

42. In the development of policies that encourage the work/life balance (within and outside the family), which include transfers of compensation and universal care services, which are flexible and high quality, aimed at all sectors of the job market, including those who are excluded from it.
43. A major agreement for the protection of employment that guarantees all those without work a sufficient income for a decent life, with guidance, training and support services to access new qualifications and with effective offers of employment before long-term unemployment sets in.
44. Building into employment programmes specific mechanisms and support actions that permit the occupational incorporation of more underprivileged sectors, including beneficiaries of income support and users of social services insertion programmes. The development of insertion companies and protected employment programmes must be included.
45. Greater collaboration between the services sector that works in the area of social exclusion when it comes to designing and managing active employment policies so that the interests of the most underprivileged sectors can be adequately taken into account.

3. We are calling on civil society to rally for a more cohesive society

46. People affected by processes of social exclusion should assert their rights, demand what they consider necessary and the changes they believe appropriate to overcome the situation in which they find themselves, and, if they consider it necessary and appropriate, ask for support from social initiative entities and public services.

-
47. They should demand to be involved in all process of drafting, developing and controlling the public policies that affect them directly.
 48. Social initiative entities must intensify their efforts to deal with the most pressing needs generated by the crisis, preventing situations of exclusion from worsening and become chronic in the future.
 49. They should continue to be “the voice of those without a voice”, developing communication and social invigoration strategies aimed at defending and demanding the rights of those sectors with the greatest social difficulties. That their role as appropriate liaisons should be recognised for the establishment of plans, measures and policies aimed at achieving social integration for vulnerable situations and collectives at risk of poverty and social exclusion.
 50. Citizens must support and actively participate in this collective strategy to achieve a more inclusive society.